

Empresarios y economistas avisan del daño para la inversión de la inestabilidad política

IMPACTO ECONÓMICO/ Los expertos advierten del contagio que puede tener para el crecimiento la pérdida de proyectos del exterior, la merma de confianza de los empresarios y consumidores, agravado por la posibilidad de una guerra arancelaria.

Gonzalo D. Velarde. Madrid
La inestabilidad institucional en la que se ha instalado España en las últimas semanas tras el estallido de los casos de corrupción que cercan al actual Gobierno constituye un catalizador de incertidumbre para los principales determinantes de la actividad económica. Más aún en un momento en el que las previsiones macroeconómicas muestran cierta pérdida de impulso de los aires de cola que han jalado el buen desempeño de los últimos años y en el que la constante amenaza de la guerra arancelaria acentúa toda sintomatología negativa. En su reciente revisión de proyecciones el Banco de España ya rebajó el crecimiento estimado para este año al 2,4% del PIB y espera que esta desaceleración se mantendrá en los dos próximos ejercicios (1,8% en 2026 y 1,7% en 2027).

Pero especialmente sensible en el contexto de inestabilidad institucional es el indicador de la inversión. En el primer trimestre del año ya experimentó una fuerte pérdida de ritmo al crecer un 1,1% (2,4 puntos porcentuales menos que en el trimestre precedente) aunque, con los indicadores adelantados, el supervisor prevé una mejoría en los meses siguientes.

Precisamente, es esta fragilidad de las inversiones la que puede estar en juego si se enquina la situación de inestabi-

lidad, tal y como advierten los economistas y empresarios consultados por EXPANSIÓN después de que hace escasos días un análisis de S&P Global sobre el pulso de la economía nacional recogiera la crisis política interna como uno de los principales riesgos para las perspectivas económicas. “La incertidumbre política ha surgido como un posible factor adverso”, señalaban sus analistas.

Precisamente, a este elemento es al que apunta el presidente de CEOE, **Antonio Garamendi**, quien asegura que los “casos de corrupción con vínculos al actual Gobierno”, así como las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “rompen la confianza del mundo empresarial” y no invitan a la inversión.

“El escenario de incertidumbre provoca que las decisiones empresariales se paralicen”, señala el director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), **Gregorio Izquierdo**, quien puntualiza que la inestabilidad institucional se suma a las inclemencias que provocan la guerra arancelaria y la ausencia de Presupuestos Generales del Estado. Este es el primer escalón de impacto económico de las crisis políticas hacia el que apuntan tanto empresarios como economistas.

“La incertidumbre y la inestabilidad institucional



El presidente de CEOE, Antonio Garamendi.



La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel.



El presidente de ATA, Lorenzo Amor.



El presidente del Círculo de Empresarios, Juan María Nin.

son enemigos de la confianza, de la inversión y de la economía. La imagen interior y exterior de nuestro país se está viendo afectada por este clima de inestabilidad y de sospechas de corrupción que se ha instalado y que está haciendo mella en las decisiones de inversión de muchas empresas, paralizando proyectos o buscando alternativas en otros países”, explica la presidenta de Cepyme, **Ángela de Miguel**.

“Es necesario la calidad institucional y la seguridad jurídica”, incide la economista jefe de Singular Bank y asesora

del Círculo de Empresarios, **Alicia Coronil**, puntualizando que el impacto en la inversión es tanto para la que llega del exterior como para la que realizan las compañías a nivel interno. “Si se enquina la situación puede permear en la demanda interna de las empresas y los consumidores”, señala como un segundo nivel del impacto económico.

Sobre la posible filtración de la incertidumbre en la demanda señala el economista y profesor de la Universidad CEU San Pablo, **Diego Barceló**, que un tercio de la demanda está siendo estimulada por

el gasto público a costa del aumento de deuda pública. “Entre la subida de las pensiones, del salario de los funcionarios, el aumento del número de empleos públicos y los fondos europeos constituyen un tercio de la demanda”, asegura.

En este sentido, De Miguel ahonda en la idea de que sería un “error” pensar que la situación actual no tiene coste porque la inercia de la actividad sea favorable. “Las decisiones de inversión que se toman hoy marcarán el crecimiento de los próximos años y se empiezan a cancelar o poner en cuarentena proyectos, lo cual

es sinónimo de menor crecimiento en el futuro. Que los datos actuales no reflejen todavía el daño, no implica que éste no exista”, advierte la representante de la pequeña y mediana empresa.

Para el presidente de ATA, **Lorenzo Amor**, “la inestabilidad política y la situación que se está viviendo por los casos de corrupción está pasando factura a la inversión y a la confianza. Incluso entre los autónomos, como refleja el último Barómetro presentado por ATA que muestra la poca confianza en la economía a medio plazo, y también

La ausencia de unos presupuestos generales, otra de las quejas por parte de los empresarios

en el desempeño de sus negocios de aquí a final de año.

“Estos gravísimos deterioros, entre ellos el de la seguridad jurídica, están afectando a la economía y el mundo empresarial”, explica el director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF), **Antonio Barderas**, que añade un componente más, el regulatorio, al caldo de inestabilidad. “Los hechos y las corrupciones que vamos conociendo no son más que un paso más en una larga lista de degeneraciones políticas”, señala Barderas avisando del contagio que tiene en términos de “pérdida de prosperidad y bienestar de empresas y ciudadanos, daños difícilmente reparables en la imagen exterior de España, lo que está espantando a posibles inversores extranjeros, que son absolutamente imprescindibles para el futuro de nuestra economía”.

“Los comportamientos indecentes, junto a la inestabilidad política que vivimos y que, entre otras cosas, impide aprobar los presupuestos en toda la actual legislatura, tienen un efecto devastador en la confianza de los agentes económicos, así como en la imagen de España y de sus principales instituciones”, señala el presidente de CEIM, **Miguel Garrido**, explicando que se traduce en una paralización de las decisiones de inversión.

Así, la falta de seguridad jurídica aparece como un elemento indisoluble al de la inestabilidad institucional. “El marco regulatorio impacta de manera importante sobre el crecimiento de la economía en el corto plazo”, relata el economista, analista financiero y profesor universitario, **Javier Santacruz**. Y explica el experto que los efectos se despliegan sobre otras variables a largo plazo, como la creación de empleo.

“Las empresas necesitan un entorno previsible, seguridad jurídica y un marco laboral flexible, incentivador de la contratación y ajeno a medidas populistas”, añade ahondando en estos riesgos de segunda ronda el presidente de UNO Logística, **Francisco Aranda**, avisando de que “la falta de estabilidad institucional se ha convertido en un obstáculo de primer orden para el crecimiento económico, la atracción de inversiones

y la buena salud del mercado de trabajo”. Aquí, uno de los riesgos latentes es la desviación de las inversiones, que “busca entornos estables con normativas fruto de consensos, y hoy en España esa confianza no existe”.

Sobre esta línea puntualiza el experto financiero y fundador de Nextep Finance, **Víctor Alvar González**, que el factor que juega a favor de España es que se encuentra dentro de la Unión Europea, ya que los inversores tienden a considerar en menor medida la situación concreta del país.

No menos importante en esta erosión de la imagen país de la que alertan empresarios y expertos está el efecto sobre el comercio exterior, por un lado, y sobre la preponderancia en las tomas de decisión que afectan a España en un contexto global de reposicionamiento europeo en el contexto de guerra arancelaria.

Sobre lo primero, el Banco de España apunta en su último informe de proyecciones que la aportación de la demanda externa neta al crecimiento fue levemente positiva (de 0,2 puntos porcentuales) en el primer trimestre, debido, principalmente, al dinamismo de las exportaciones de servicios –en especial las de servicios no turísticos–, lo que más que compensó el leve descenso que experimentaron las exportaciones de bienes. “Un componente importante son las exportaciones”, explica Santacruz.

Por otro lado, Alicia Coronil trae a colación que todo este panorama redundará en un último efecto, “la pérdida de peso en las decisiones críticas de geoconomía a nivel internacional”. Asegura que la coyuntura interna puede determinar el rol de España a la hora de abordar el “rediseño del proyecto europeo”.

Por todo ello, el **Círculo de Empresarios** apunta hacia la necesidad de establecer un cortafuegos contra la corrupción erosionadora de todo el contexto social y económico como vía para mantener los resortes del crecimiento, ya que estas malas prácticas “reducen el atractivo de nuestro país como foco de inversiones” y “desincentivan el emprendimiento y la creación de valor”. “Debilita nuestras instituciones públicas y privadas, frena el normal crecimiento económico y, además, deteriora la imagen de los verdaderos empresarios y empresas”, señala la organización dirigida por Juan María Nin, urgiendo a la aprobación de una Estrategia Nacional Anticorrupción.